

PRESS/TE 019
14 de agosto de 1997

SIMPOSIO SOBRE COMERCIO, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA OMC

La Secretaría de la OMC organizó, bajo su propia responsabilidad, un Simposio con organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre comercio, medio ambiente y desarrollo sostenible, que tuvo lugar los días 20 y 21 de mayo de 1997. El Simposio se celebró en Ginebra en la sede de la OMC. Participaron en él representantes de organizaciones empresariales, de desarrollo y ecológicas, así como gobiernos Miembros de la OMC.¹ Los Gobiernos de los Países Bajos, el Canadá y Australia proporcionaron asistencia financiera para facilitar la participación en el Simposio de organizaciones no gubernamentales de países en desarrollo.

El objetivo del Simposio era proseguir el diálogo constructivo entre la OMC y representantes de la sociedad civil sobre las interconexiones entre comercio, medio ambiente y desarrollo sostenible. El Simposio se organizó de conformidad con la Decisión del Consejo General de la OMC de julio de 1996 acerca de "Directrices para la adopción de disposiciones sobre las relaciones con organizaciones no gubernamentales".

El Simposio se dividió en siete sesiones, en las que organizaciones no gubernamentales empresariales, de desarrollo y ecológicas presentaron distintos aspectos de los temas incluidos en el orden del día (véase el orden del día en el anexo I). Durante un extenso intercambio informal entre ONG y Miembros de la OMC se trató una amplia gama de cuestiones. No se intentó, durante el Simposio, llegar a un resumen de las opiniones o a posiciones objeto de consenso. En la nota que figura a continuación se proporciona una breve reseña de algunas de las principales opiniones expresadas por los participantes.

Primera sesión: Mundialización, comercio y desarrollo sostenible

Varios participantes señalaron que la mundialización era un potente motor que impulsaba tanto la integración económica internacional como la protección del medio ambiente. Sin embargo, por sí misma, no contribuía a la realización del imperativo de desarrollo de los países en desarrollo ni garantizaba una protección suficiente del medio ambiente. Casi 1.000 millones de personas permanecían en la periferia de la mundialización económica, y la pobreza era una causa permanente de deterioro ambiental. Algunos participantes sugirieron que acontecimientos recientes ocurridos en el marco de la OMC, entre ellos los compromisos de liberalización asumidos en el sector de las telecomunicaciones, reafirmaban el sesgo en favor de los intereses de los países industrializados. En cambio, los progresos realizados en la libe-

¹La lista de participantes puede solicitarse a la secretaría de la División de Comercio y Medio Ambiente de la OMC en:

+41.22/739.53.83 (teléfono)

+41.22/739.56.20 (fax)

webmaster@wto.org

ralización de los sectores en los que la exportación revestía especial interés para los países en desarrollo, incluidos los textiles y la agricultura, permanecían estancados y eran objeto de constante discriminación. Eran necesarios mayores esfuerzos para atender las necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados, en particular una mejor integración de los países en desarrollo en el sistema multilateral de comercio, un aumento de la acumulación de capacidad que incluyera la integración práctica de las políticas de desarrollo y ambientales, un renovado compromiso de la OMC respecto del trato especial y diferenciado de los países en desarrollo y un mejor reconocimiento de la responsabilidad común pero diferenciada en los regímenes internacionales sobre medio ambiente.

Se identificó la correlación potencialmente positiva que existía entre la liberalización del comercio y la calidad del medio ambiente, en la que el comercio constituía una importante contribución al desarrollo sostenible. No obstante, la aceleración de la degradación ambiental representaba otro barómetro real de la mundialización. En ésta y otras sesiones, los participantes señalaron el fracaso del seguimiento de la CNUMAD. Los compromisos asumidos en Río en 1992, por ejemplo en relación con financiación nueva y adicional y con la transferencia de tecnología, no se habían materializado, había habido una fragmentación de los regímenes internacionales sobre medio ambiente, las políticas ecológicas estaban en retirada y la calidad ambiental seguía descendiendo. Se mencionaron varios estudios, entre ellos el realizado por el PNUMA en 1997 sobre las perspectivas mundiales del medio ambiente, que proporcionaban sólidas pruebas de la aceleración de la degradación ambiental. Problemas como los cambios climáticos, el uso cada vez mayor de productos químicos tóxicos y compuestos químicos orgánicos sintéticos, el derrumbamiento de la pesca mundial, las tasas insostenibles de deforestación y el agotamiento de la capa de ozono eran indicadores alarmantes de la necesidad de adoptar nuevas medidas. Algunos observaron que el seguimiento insuficiente de la CNUMAD demostraba que los gobiernos no podían poner en práctica un desarrollo sostenible, por lo que incumbía a la sociedad civil internacional una mayor responsabilidad en ese sentido. Las normas comerciales tenían que funcionar en beneficio del medio ambiente, y se sugirió que la piedra de toque de las decisiones sobre el comercio internacional debía ser si fomentaban el desarrollo sostenible. No obstante, no estaba claro cómo podía medirse cuantitativamente la aplicación al comercio de ese criterio del desarrollo sostenible.

Se señaló la importante función de los círculos empresariales en el logro del desarrollo sostenible. Reconociendo que éstos necesitaban normas comerciales estables y previsibles, se consideró que la actual incertidumbre en torno a la relación entre las normas comerciales y las políticas sobre medio ambiente daba lugar a una inestabilidad del sistema que había de eliminarse. Las empresas seguían haciendo progresos en la adopción de objetivos ambientales, utilizando, en particular, en mayor medida códigos de conducta ecológicos voluntarios, sistemas de ordenación del medio relacionados con los enfoques de la gestión de la calidad global, planes de etiquetado ecológico y otras medidas.

Varios participantes consideraron que el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC no había integrado lo suficiente el comercio, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y que debía adoptar un orden del día más concreto y orientado a la adopción de medidas para aclarar las vinculaciones entre el comercio y el medio ambiente. Algunos señalaron con inquietud la tendencia que podía observarse en la OMC a convertir las diferencias comerciales entre empresas privadas en diferencias formales entre Estados; los problemas sistémicos relacionados con la interpretación dada por la OMC al "producto similar" y la necesidad de que el Comité de Comercio y Medio Ambiente adoptara un orden del día claramente redactado y orientado a la adopción de medidas durante los dos próximos años o se arriesgara a perder la confianza de los grupos empresariales y las organizaciones ecológicas. Un participante sugirió que se pusiera término a la labor de ese Comité, dada su falta de progresos. Varios otros consideraron que el Comité representaba un equilibrio entre los intereses de los países en desarrollo y desarrollados, que participaban en sus reuniones representantes de los ministerios de comercio, medio ambiente y otros y que la comprensión de las vinculaciones entre el comercio y el medio ambiente seguía siendo compleja.

Segunda sesión: Sinergias entre la liberalización del comercio y el medio ambiente

Varios participantes señalaron que el análisis empírico de las vinculaciones entre la reforma de las políticas comerciales y la calidad del medio ambiente seguía siendo deficiente; otros consideraron que era necesaria una mayor labor empírica en relación con los exámenes de las políticas comerciales desde el punto de vista del medio ambiente a nivel sectorial y de los países. Los trabajos realizados por organizaciones, como el World Resources Institute (Instituto de

los Recursos Mundiales) y otras, sobre la correlación entre la calidad del medio ambiente y la liberalización del comercio parecían indicar que existían diferencias significativas según los sectores y los países. La medida en que las políticas ambientales se aplicaban en forma interconectada con la reforma de las políticas comerciales era también un factor importante. Un participante señaló que el objetivo subyacente era garantizar que mejoraran las reglamentaciones ambientales a medida que desaparecieran los obstáculos al comercio. No obstante, esta secuencia de las políticas no siempre era evidente. Por ejemplo, algunos participantes consideraron que, aunque las empresas de mayor tamaño, con bienes de capital más nuevos, eran capaces de adaptarse a la liberalización del comercio y a las reglamentaciones consiguientes sobre medio ambiente, las pequeñas y medianas empresas seguían siendo vulnerables, tanto ante la liberalización como ante la necesidad de sufragar los costos más elevados que implicaba el cumplimiento de las normas ambientales. Por ejemplo, a esas empresas con frecuencia les resultaba difícil cumplir las reglamentaciones nacionales sobre medio ambiente, lo cual hacía aún más gravoso el respeto de las diversas normas establecidas en los distintos mercados de exportación.

Varios participantes se refirieron a la reforma de las subvenciones como aspecto en el que se debía intentar enérgicamente establecer sinergias positivas, es decir correlaciones beneficiosas para ambas partes entre la reforma de las políticas comerciales y la mejora del medio ambiente, en particular a la luz de las obligaciones prescritas en el marco de la OMC con arreglo al Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. Las subvenciones perpetuaban y aumentaban la degradación del medio ambiente, violaban el principio de quien contamina paga, tendían a favorecer las coaliciones nacionales y eran ineficientes desde el punto de vista económico. Un participante estimó que los gobiernos gastaban anualmente en subvenciones en torno a los 700.000 ó 900.000 millones de dólares. Una esfera en la que las subvenciones tenían efectos especialmente desfavorables era el sector agropecuario. Las subvenciones concedidas a este sector en los países desarrollados estaban vinculadas con distorsiones de los precios y con la inestabilidad de los precios internacionales de los productos básicos, que eran perjudiciales para los productores agropecuarios de los países en desarrollo. Al mismo tiempo, esas subvenciones contribuían a la degradación ambiental, debido al uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas. Podían observarse también daños al medio ambiente resultantes de subvenciones en los sectores de la energía y el agua y en otros sectores. Refiriéndose a la necesidad de reducir o eliminar las subvenciones, otros participantes observaron que esa reducción podía tener en las economías en desarrollo efectos no previstos de distribución del ingreso y de otro tipo y que las reformas de las políticas debían llevarse a cabo con cautela. Se sugirió también que debía prestarse mayor atención a la inversión y el medio ambiente, así como a las cuestiones relativas a los ADPIC.

Un participante observó que el debate que se estaba desarrollando en el Simposio reproducía el que había tenido lugar en el Comité de Comercio y Medio Ambiente: aunque existía un acuerdo general sobre grandes objetivos de principio, como la reforma de las subvenciones o el desarrollo sostenible, diferían las posiciones en lo relativo a las prioridades. Se señaló que el Comité de Comercio y Medio Ambiente era distinto de la mayor parte de los comités de la OMC porque no se encargaba de la administración de un Acuerdo oficial de la Organización. Las sugerencias formuladas acerca de la labor de ese Comité incluyeron la necesidad de identificar los efectos negativos de la liberalización del comercio en el medio ambiente; intensificar los trabajos sobre las mercancías prohibidas a nivel nacional; y determinar cuáles podían ser, si las hubiere, las limitaciones de las políticas ambientales relacionadas con normas comerciales, independientemente del rechazo general de las medidas comerciales unilaterales por numerosos participantes.

Tercera sesión: Los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y la OMC

Se exploró la relación entre los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA) y la OMC. Se sugirió que ni la OMC ni los AMUMA podían ocuparse aisladamente de las consecuencias de las interacciones entre el comercio y el desarrollo sostenible. Se puso de relieve la necesidad de una mejor cooperación entre ellos. Se señaló también que, aunque hasta el momento no habían surgido diferencias entre un AMUMA y la OMC, esto no era razón suficiente para suponer que no surgirían en el futuro.

Varios participantes expresaron su decepción ante los resultados de la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Singapur del 9 al 13 de diciembre de 1996 en cuanto a la relación entre las normas de la OMC y los AMUMA. Los círculos comerciales consideraban que la persistente incertidumbre respecto de esa relación debilitaba la eficacia de los AMUMA. En relación con esto, algunos participantes señalaron que esa incertidumbre había contribuido a "enfriar"

varias negociaciones encaminadas a concertar AMUMA, inclusive las relativas a los cambios climáticos y a la seguridad de la biotecnología. Se estudiaron diversas propuestas de modificación del artículo XX del GATT, en particular mediante la adición del término "el medio ambiente" en el apartado b) del artículo XX; el apoyo de la propuesta formulada por la UE en el Comité de Comercio y Medio Ambiente en 1996 de que se permitieran excepciones en el caso de las medidas comerciales adoptadas de conformidad con AMUMA; la revisión de la interpretación del artículo XX; y otras opciones. No obstante, se expresó la necesidad de cautela en relación con la incertidumbre que llevarían consigo cambios de ese tipo en las normas de la OMC, que podrían dar lugar a que se propusieran modificaciones en otras esferas. Algunos participantes sugirieron que esos cambios propuestos de las normas para obtener una mayor flexibilidad que permitiera dar cabida a los objetivos ambientales debían tener en cuenta las posibilidades de abusos proteccionistas inherentes a la flexibilidad de las normas. Se sugirió que, con unos cambios limitados, la cláusula de encabezamiento del artículo XX podía proteger contra esos abusos. No obstante, los AMUMA deberían justificar la utilización de medidas comerciales mediante elementos científicos sólidos. Una posibilidad era incluir una presunción en virtud de la cual las medidas comerciales adoptadas de conformidad con un AMUMA se consideraran necesarias hasta que un reclamante pudiera demostrar lo contrario. Muchos participantes reafirmaron la necesidad de rechazar enérgicamente el unilateralismo.

Algunos participantes consideraron que la adopción de medidas comerciales en el marco de los AMUMA era inapropiada, ya que reflejaba el poder que los países industrializados tenían sobre los países en desarrollo. Aunque los primeros criticaban a los segundos por no respetar las políticas ambientales, la principal responsabilidad de la degradación del medio ambiente correspondía a los países industrializados. Las medidas comerciales, tal como se formulaban actualmente, parecían incluso representar una amenaza o un castigo para los países en desarrollo. Otro participante consideró que, aunque la formación y la cooperación técnica contribuían a que se apreciara mejor el problema, no bastaban para responder a las inquietudes de los países en desarrollo y que eran necesarias nuevas medidas para asegurar la participación de esos países.

Cuarta sesión: Los ADPIC y el medio ambiente

En esta sesión se examinó la relación entre el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el medio ambiente. Algunos participantes pusieron de relieve la relación positiva que existía entre el medio ambiente y el Acuerdo sobre los ADPIC, como instrumento para el fomento del desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales. Algunos señalaron que los derechos de propiedad intelectual (DPI) proporcionaban una exclusividad limitada en el tiempo, lo cual fomentaba la creatividad en el desarrollo de las nuevas tecnologías, en particular de las ecológicamente racionales. Si no existieran las patentes y los DPI, el sector privado vacilaría en dedicar inversiones apreciables a la investigación y al desarrollo de nuevas tecnologías ecológicamente racionales. En ese contexto, se consideró que el Acuerdo sobre los ADPIC favorecía el desarrollo sostenible al estimular la innovación y crear incentivos para la inversión; cualquier reducción de los incentivos que llevaban consigo los DPI debilitaría también el desarrollo de nuevas tecnologías.

Otros participantes pusieron en duda que el sector privado necesitara poseer un monopolio sobre la tecnología, adquirido mediante las patentes y los DPI, para desarrollar nuevas tecnologías, señalando que los ingresos que los que abrían camino obtenían de su inversión garantizaban habitualmente una amplia rentabilidad. Se expresaron preocupaciones en relación con el Acuerdo sobre los ADPIC, en particular con la dificultad que suponía el reconocimiento de los conocimientos tradicionales o de base comunitaria; la opinión de que los DPI favorecían a las empresas de mayor tamaño de países industrializados y creaban rentas monopolísticas en esferas relacionadas con los objetivos de las políticas públicas, tales como el respeto de las reglamentaciones ambientales que requerían una tecnología especial; y el hecho de que el Acuerdo sobre los ADPIC carecía de la flexibilidad necesaria para asegurar la remuneración equitativa de los conocimientos tradicionales y las comunidades locales. Además, se manifestaron inquietudes relativas a las vinculaciones entre los DPI y los organismos genéticamente modificados, los microorganismos y los organismos vivos. Se formularon distintas sugerencias, inclusive de que se modificara el Acuerdo sobre los ADPIC a fin de asegurar el establecimiento de sistemas de patentes más flexibles para los países en desarrollo, así como la distribución más equitativa de los beneficios resultantes de las patentes y los DPI; se establecieron disposiciones más flexibles para el desarrollo y la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales; se reconociera a los Estados el derecho a otorgar licencias obligatorias en relación con las tecnologías ecológicamente racionales; se acortara la duración de la protección concedida por las patentes; y se

modificara el artículo 27 2) b) del Acuerdo sobre los ADPIC para incluir referencias precisas a la diversidad biológica y a los objetivos ambientales.

En cuanto al Convenio sobre la diversidad biológica, se señaló que era necesario seguir trabajando para comprender las cuestiones económicas, jurídicas, institucionales y de otro tipo que planteaban las vinculaciones entre ese Convenio y la OMC. Entre ellas se incluían el acceso a los recursos genéticos, los DPI y los organismos genéticamente modificados, la distribución equitativa de los beneficios obtenidos de los recursos genéticos, los derechos de los criadores de variedades vegetales en relación con los DPI y la protección de los conocimientos autóctonos.

Quinta sesión: Acceso a los mercados: panorama general

Se examinaron los posibles obstáculos al acceso a los mercados vinculados con las medidas sobre el medio ambiente y las oportunidades de creación de mercados que llevaban consigo las metas ambientales. En general, se consideró que los productos y servicios ecológicamente racionales representaban hasta un 10 o un 15 por ciento del mercado, lo cual indicaba que los consumidores estaban dispuestos, en principio, a pagar una prima de mercado por los productos ecológicos. Se preveía que este porcentaje aumentaría. En relación con esto, crecerían también otros aspectos, como el turismo ecológico, cuyo valor actual era de 160.000 millones de dólares anuales, según las estimaciones, y la agricultura orgánica, con un valor estimado de 500 millones de dólares al año. No obstante, las plenas posibilidades del consumismo ecológico quedaban sin realizar, debido en parte a que los consumidores no confiaban en las declaraciones relativas a la calidad ecológica que acompañaban a los productos.

Se hizo referencia a estudios monográficos sobre países (por ejemplo, de la UNCTAD) en los que se ponían de relieve los posibles efectos de limitación de los mercados que ejercían las normas sobre medio ambiente y el hecho de que los costos que implicaba el cumplimiento de esas normas podían ser relativamente más elevados para los países en desarrollo y podían tener consecuencias para el empleo debido a que numerosas normas ambientales exigían la utilización de tecnologías basadas en procedimientos de gran intensidad de capital. Algunos participantes consideraron que las normas ambientales podían tener la finalidad de proteger industrias no eficientes de países industrializados. Se mencionó, a ese respecto, la introducción de nuevas normas para los productos textiles ecológicamente racionales.

Se examinaron los planes de etiquetado ecológico, los sistemas de ordenación del medio, la certificación ecológica y otros métodos que estaban surgiendo para tener en cuenta las preocupaciones ambientales. Para evitar los obstáculos al acceso a los mercados que llevarán consigo esos enfoques era necesario dedicar mayor atención a asegurar que su establecimiento en los países desarrollados se llevara a cabo en forma transparente y se necesitaban nuevas maneras de ayudar a los países en desarrollo a afrontarlos. A lo largo de todo el debate, numerosos participantes insistieron en la importancia de la transparencia. Varios oradores señalaron que los planes de etiquetado ecológico podían crear obstáculos al acceso a los mercados y que era necesario seguir trabajando sobre su equivalencia y su reconocimiento recíproco. Se expresaron distintas opiniones sobre los sistemas de ordenación del medio que estaban surgiendo en relación con las normas 14000 de la ISO: algunos participantes señalaron que esto representaba un importante paso en la armonización internacional de las normas ambientales, mientras que otros se refirieron a aspectos desequilibrados en la elaboración de esas normas, como la ausencia de participantes de países en desarrollo, la aportación desproporcionada de las empresas de mayor tamaño y la falta de una perspectiva ambiental.

Se formularon sugerencias destinadas a ayudar a los países en desarrollo a capitalizar las oportunidades que estaban surgiendo en el mercado ecológico, en particular aumentando la transferencia de tecnología, proporcionando a esos países más tiempo para cumplir las normas ambientales, identificando los problemas particulares que tenían las pequeñas y medianas empresas de países en desarrollo para ajustarse a esas normas y alentando a los planes de etiquetado ecológico a respetar el Código de Buena Conducta anexo al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Al igual que en otras sesiones, varios participantes expresaron su alarma ante el creciente uso del unilateralismo como medio de imponer normas o valores ambientales. Como cuestión más general, algunos seguían considerando decepcionantes los progresos realizados en el Comité de Comercio y Medio Ambiente en relación con el acceso a los mercados y otras cuestiones.

Sexta sesión: Aranceles, medidas no arancelarias y medio ambiente

El debate se centró en algunos elementos concretos de las vinculaciones entre el comercio y el medio ambiente, incluidas las cuestiones sectoriales. Por ejemplo, en el sector de la silvicultura, eran necesarios esfuerzos encaminados a seguir reduciendo los aranceles y a eliminar las distorsiones ambientales que llevaba consigo la progresividad arancelaria aplicada a los productos semielaborados y elaborados de la madera. Se examinaron con cierto detalle los beneficios para el medio ambiente y los aspectos relacionados con el comercio de las etiquetas ecológicas de los productos forestales. Algunos consideraron que las etiquetas ecológicas del tipo I, no sólo en el caso de los productos de la madera sino también en otros sectores, podían tener mayor tendencia a distorsionar el comercio que las etiquetas del tipo III, que contenían información sobre distintos tipos de criterios ambientales. Un participante sugirió que las etiquetas que proporcionaban información en forma desglosada evitaban problemas de definición relacionados con el "producto similar". Se adujo que la OMC no era el foro que debía decidir si los criterios ambientales eran apropiados en sí mismos y que su mandato debía limitarse a determinar si una etiqueta ecológica daba lugar a una distorsión del comercio. Algunos participantes advirtieron del posible uso indebido de los sistemas de certificación, que representaban una actividad lucrativa para las entidades encargadas de ellos pero que tenían consecuencias poco claras para el medio ambiente y el desarrollo.

En relación con el sector pesquero, se hizo referencia a prescripciones nacionales en materia de conservación que preveían el empleo de ciertos métodos de pesca que imponían costos de explotación adicionales a los sectores pesqueros de los países en desarrollo. Así ocurría en el caso de la pesca de especies de gran valor como los camarones, las veneras, las sardinias, el atún y otras. Aunque se habían hecho progresos en la adopción de enfoques multilaterales para una pesca sostenible, incluidos el Código de Conducta de la FAO y la labor realizada en las Naciones Unidas sobre las poblaciones compartidas, la amenaza de unilateralismo debilitaba los enfoques basados en un consenso, a menudo en detrimento de los países en desarrollo. Muchos consideraban que los progresos realizados en el desarrollo de etiquetas ecológicas voluntarias, basadas en organizaciones no gubernamentales, para los productos de la pesca y de la silvicultura eran un signo favorable, aunque también era necesario mejorar el ámbito y la transparencia de los criterios elegidos para esos sistemas. Se expresaron dudas acerca de la contribución al medio ambiente del proceso de las normas 14000 de la ISO. Se hizo referencia a la estrecha relación existente entre la creciente falta de confianza de los círculos ecológicos en las etiquetas ecológicas y los sistemas de certificación, de los que se creía que eran diseñados por los sectores empresariales principalmente para facilitar el comercio y no para atender las prioridades ambientales.

En el sector de los metales, existían posibilidades de eliminar aranceles, resolviendo así los problemas ambientales que llevaba consigo la progresividad arancelaria. En relación con esto, los productores de café se enfrentaban con un problema similar de progresividad arancelaria, que obligaba a los pequeños productores a exportar materias primas no elaboradas. Se hizo referencia a las posibles distorsiones del comercio resultantes de prescripciones obligatorias en materia de reciclado en los sectores de los metales, que podían dar lugar a la exclusión de los productores de países en desarrollo, y a los efectos distorsionantes de la prohibición de la exportación de desechos peligrosos de los países desarrollados a los países en desarrollo con arreglo al Convenio de Basilea.

Séptima sesión: Relaciones con las organizaciones no gubernamentales

Numerosos participantes acogieron favorablemente la celebración del Simposio, en general, y la disposición de los Miembros de la OMC a mantener un intercambio informal de opiniones con las ONG, en particular. Se acogió con agrado la idea de celebrar en el futuro reuniones de carácter periódico con las ONG. Muchos participantes insistieron en la necesidad de que la OMC intensificara su interacción con las ONG y con la sociedad civil internacional, poniendo de relieve que esas organizaciones podían desempeñar un importante papel en el esclarecimiento de las vinculaciones entre el comercio, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, en el incremento de la confianza del público en la liberalización del comercio y en el intento de conseguir que las políticas comerciales tuvieran en cuenta el medio ambiente. La experiencia demostraba que los funcionarios encargados de las cuestiones comerciales necesitaban la aportación de los expertos en el medio ambiente, en particular de las ONG y que éstas estaban muy interesadas en las consecuencias normativas de la labor de la OMC. Aunque la Decisión del Consejo General sobre las organizaciones no gubernamentales de julio de 1996 había considerado importantes las consultas con ONG a nivel nacional, un estudio realizado demostraba

que sólo tres Miembros de la OMC celebraban con regularidad consultas de ese tipo acerca de cuestiones relativas al comercio y el medio ambiente. Por consiguiente, la interacción en el plano nacional era importante.

Se formularon distintas sugerencias encaminadas a intensificar las consultas con las ONG y a conseguir la transparencia de la labor de la OMC, en particular dando acceso a documentos en el momento oportuno, antes de las reuniones; proporcionando recursos a los Miembros a fin de que las ONG de países en desarrollo pudieran contribuir en forma constante al debate sobre el comercio y el medio ambiente; incluyendo representantes de las ONG en las delegaciones nacionales; considerando la posibilidad de que las ONG participaran en calidad de *amicus curiae* en los procedimientos para la solución de diferencias; estableciendo un mecanismo permanente para las consultas de la OMC con las ONG; realizando un examen, en un plazo de dos años, en consonancia con la Decisión del Consejo General sobre las relaciones con ONG; y asegurando que los documentos que dejaran de tener carácter reservado se pusieran inmediatamente a disposición de las ONG a nivel nacional.

ANEXO I

Simposio sobre comercio, medio ambiente y desarrollo sostenible de la OMC 20 y 21 de mayo de 1997

Presidencia: Sr. Gary P. Sampson,
Director de la División de Comercio y Medio Ambiente

MARTES, 20 DE MAYO DE 1997

8.30 Inscripción de los participantes

9.00 Observaciones de bienvenida

**9.20 Primera sesión:
Mundialización, comercio y desarrollo sostenible**

Oradores:

- * Chakravarthi Raghavan, South-North Development Monitor
- * Clifton Curtis, Greenpeace International
- * Margaret Flaherty, World Business Council for Sustainable Development

Ponente:

- * Konrad von Moltke, International Institute for Sustainable Development

Debate

**11.30 Segunda sesión:
Sinergias entre la liberalización del comercio y el medio ambiente**

Oradores:

- * Paul Faeth, World Resources Institute
- * Martin Khor, Third World Network
- * Robin Rosenberg, North-South Centre

Ponentes:

- * André de Moor, Institute for Research on Public Expenditure
- * Daniel Chudnovsky, Centro de Investigaciones para la Transformación

Debate

13.30 Comida

14.30 Tercera sesión:
Los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y la OMC

Oradores:

- * James Cameron, Foundation for International Environmental Law and Development
- * Reinhard Quick, Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe
- * Sunita Narain, Centre for Science and Environment

Ponente:

- * Ojijo Odhiambo, KENGO

Debate

16.30 Cuarta sesión:
Los ADPIC y el medio ambiente

Oradores:

- * Thomas Jacob, DuPont
- * Richard Tarasofsky, IUCN Bonn
- * Manuel Ruiz, SPDA

Ponente:

- * Victoria Tauli-Corpuz, Tebtebba Foundation

Debate

MIÉRCOLES, 21 DE MAYO DE 1997

8.30 Quinta sesión:
Acceso a los mercados: Panorama general

Oradores:

- * Maria Elena Hurtado, Consumers International
- * Walden Bello, Focus on Global South
- * Denise O'Brien, Cámara de Comercio Internacional

Ponentes:

- * Pradeep Mehta, Consumer Unity and Trust Society
- * Ratnakar Adhikari, South Asia Watch on Trade Economics and Environment

Debate

10.00 Sexta sesión:
Aranceles, medidas no arancelarias y medio ambiente

Oradores:

- * Brian McClay, Canadian Pulp and Paper Association
- * Carlos Mazal, OLDEPESCA
- * Charles Arden-Clarke, Fondo Mundial para la Naturaleza

Ponentes:

- * Pierre Hauselmann, Forestry Stewardship Council
- * Murray Smith, Consejo Internacional de Metales y Medio Ambiente
- * Ovidio Gasparetto, Amazonex S.A.

Debate

12.30 Última sesión:
Relaciones con las organizaciones no gubernamentales

Oradores:

- * Ricardo Melendez, Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible
- * Brennan van Dyke, Centre for International Environmental Law Discussion

Debate

13.30 Clausura del Simposio